

¿Corrupción creciente?

Eduardo Engel*

“En el último tiempo quedaron en tela de juicio aquellos índices de probidad que ubicaban a Chile como uno de los países libres de corrupción, sólo comparable con naciones como Alemania o Francia” editorializó recientemente un importante diario nacional. El mismo día el Financial Times de Londres relataba en portada los entretelones del juicio por corrupción más grande de la historia de Francia. Treinta y siete acusados de apropiarse de más de 400 millones de dólares hacia fines de los ochenta y comienzos de los noventa, fondos pertenecientes al conglomerado petrolero francés Elf, que en aquel entonces era un holding estatal.

Loik Le Floch-Prigent, gerente general de Elf de 1989 a 1993, no ha podido justificar la compra de una mansión en París por más de 9 millones de dólares. “En Elf todo era exagerado, lo cual erosionaba el sentido de la realidad...”, afirmó, inmutable, ante el juez. Inicialmente insitió que la casa de campo de lujo comprada a nombre de la empresa era para alojar a Omar Bongo, presidente de Gabón, país petrolero donde Elf tenía intereses vitales. (La redecoración de la cocina, que costó casi 100 millones de pesos chilenos, fue descrita inicialmente como “gabonización” de la casa). Pero su ex esposa reveló en la corte que la casa en cuestión era para uso personal de Le Floch-Prigent, cuestión que éste ocultó con objeto de evadir impuestos.

El juicio del caso Elf recién comienza, y se esperan mucho más detalles acerca de las poco transparentes operaciones internacionales del conglomerado petrolero, en particular, el negociado entre el entonces Presidente Mitterrand y el ex canciller alemán Helmut Kohl para invertir en la refinería Luenau en Alemania Oriental, un escándalo que contribuyó a la caída de Kohl.

“Está bien”, reclamará más de un lector. Francia y Alemania no lideran el ranking en control de la corrupción, de hecho, los líderes son Finlandia, Nueva Zelanda y Singapur, pero esto no quita que la situación en Chile se ha deteriorado de manera notable en el último año.

Tampoco es cierto. El jueves 8 de mayo se hicieron públicos los seis índices de gobernanza –definida como “las tradiciones e instituciones mediante las cuales se ejerce el poder en un país”– que cada dos años publica el Banco Mundial (disponibles en <http://info.worldbank.org/governance/kkz2002/>). La nueva base de datos corresponde al año 2002 y cubre casi 200 países. Si la afirmación del edi-

torialista es correcta, sería de esperar un deterioro notable de Chile en el índice de “Control de la Corrupción”. Mal que mal, el año pasado ya habían estallado los casos coimas y Gate.

Pues bien, la posición de Chile en el concierto mundial no ha cambiado respecto de la versión anterior del índice (año 2000): Chile sigue estando entre los países menos corruptos, con indicadores que nos dejan mejor que el 90 % de los países (es decir, en el percentil 90). En efecto, el año 2002 Chile ocupa el lugar 19 en control de corrupción, de un total de 195 países, al mismo nivel que el promedio del club de países industrializados de la OECD.

Convengamos, entonces, que los problemas de corrupción destapados en Chile son problemas de país desarrollado, que no tienen nada que ver con los problemas que aquejan en este tema a nuestros vecinos sudamericanos (la posición promedio del resto del continente es alrededor de la 125).

La afirmación anterior no tiene por objetivo excusar lo ocurrido. Por el contrario, los escándalos de corrupción pusieron de manifiesto el opaco financiamiento de la política chilena, abriendo posibilidades para realizar reformas que hasta hace poco eran impensables. Las principales áreas para reformar son dos. Primero, reducir los cargos públicos que son elegidos con criterios políticos, mejorando así la eficiencia del sector público y reduciendo de paso una fuente indeseable de financiamiento electoral. Segundo, transparentar las donaciones políticas privadas, de modo de evitar situaciones de “captura del estado”. La pregunta del millón es si se está aprovechando esta oportunidad para lograr los objetivos recién descritos.

La recientemente acordada reducción de cargos públicos nombrados con criterios políticos de 3.000 a 700 ha sido un resultado esperanzador. En cambio, los acuerdos anunciados hasta ahora en materia de transparentar el financiamiento electoral son poco alentadores. Para empezar, cuesta entender por qué se ha acordado permitir que las empresas hagan donaciones políticas. Quienes votan son los ciudadanos, no las empresas, luego, quienes financian la política también debieran ser los ciudadanos.

Tampoco tiene sentido poner límites al gasto electoral si éstos no se van a fiscalizar seriamente. Y la experiencia internacional indica que la única manera de fiscalizar el gasto electoral es creando un organismo independiente que recauda todas las donaciones electorales y realiza todos los pagos asociados a las campañas. México es un caso exitoso en esta materia, ya que la existencia de un Instituto Federal Electoral independiente jugó un rol central en la derrota del PRI luego de más de medio siglo en el poder. Por todo esto es preocupante que la fiscalización de los límites de gasto no ha sido prioritaria en la discusión del financiamiento electoral.

Para terminar con una nota algo más optimista, volvamos a los seis índices de gobernanza publicados el jueves pasado, y veamos la evolución de Chile en cada uno de ellos. En cuatro

de ellos la situación se ha mantenido estable entre el 2000 y el 2002: efectividad del gobierno, calidad regulatoria, estado de derecho y el ya mencionado control de la corrupción. En estabilidad política hay una mejora nada de despreciable, desde el percentil 79 al 86. Pero donde la mejora es impresionante es en el índice de “voz y accountability”, donde Chile pasó del percentil 65 al percentil 84. Posiblemente el rol más inquisitivo que ha adoptado la prensa durante el último año, sobre todo cuando se trata de monitorear a funcionarios públicos, explica parte importante de esta mejora. Este proceso es bueno para el país, aun cuando, tal como lo ilustra la cita con que comienza esta columna, es importante no perder el sentido de las proporciones.

***Eduardo Engel es Profesor Titular de Economía de la Universidad de Yale.**